

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 18° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-29182-2019
CARATULADO : HINOJOSA/CONSEJO DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, diecisiete de Enero de dos mil veintidós

VISTOS:

Don Luis Pérez Camousseight, abogado, domiciliado en Pasaje Dr. Sótero del Río N°326, oficina n°707, comuna de Santiago, compareciendo en representación de don Joaquín Castellanos Guerra, pensionado, domiciliado en Las Magnolias n°174, La Foresta, Melipilla, don Eliseo Heriberto Concha Muñoz, pensionado domiciliado en calle Carlos Avilés n°388, Melipilla, don Jaime Agustín Salinas Véliz, pensionado, domiciliado en Pasaje Honofre Cantillana n°608, Melipilla, don Eugenio Arnoldo Soto Suárez, pensionado domiciliado en calle Silva Chávez n°1426, Melipilla, don Benjamín Emilio Cortés Valdenegro, pensionado, domiciliado en Quelentaro Centro S/N, San Pedro, don Juan Guillermo Cornejo Sánchez, pensionado, domiciliado en calle Arturo Pérez n°689, Melipilla, don Rafael Arcángel Trujillo Osorio, cesante, domiciliado en Caupolicán n°1662, Población Teniente Merino, Melipilla, y de don Alfonso Segundo Hinojosa Serrano, pensionado, domiciliado en Polonia n°2080, Villa Inca, Melipilla, deduce demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas 1687, comuna de Santiago.

Funda la demanda en base a los hechos relatados por los demandantes respecto a las torturas, vejaciones y otros tratos inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos.

- 1) Señala que don Joaquín Castellanos Guerra, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura n°198, nacido el 17 de julio de 1950, de actuales 69 años de edad, militante de las Juventudes Comunistas a la época de ocurrencia de los hechos, delegado sindical, de la sección 444 del departamento 4000 de la industria Soinca Bata, fue detenido en su lugar de trabajo el día 16 de septiembre de 1973 por personal de Carabineros de Chile de la Comisaría de Melipilla al mando de un teniente que recibía el apodo de “PEDRO PACO”). Indica que él junto a otros compañeros de trabajo fueron sacados en forma violenta de la industria y trasladados a la comisaría de Melipilla. En el primer interrogatorio de que fue objeto le preguntaron de manera reiterada por el paradero del diputado Matías Núñez, siendo amenazado de muerte y torturado. En torno a las torturas, fue objeto de un simulacro de fusilamiento, lo pusieron a él y a otros detenidos alrededor de unas palmeras y personal uniformado comenzó a disparar, simulando que los iban a matar a todos. Lo anterior, duró varios días. Transcurridas un par de semanas fue llevado a un retén que quedaba como a un kilómetro de Soinca Bata, lugar donde lo mantuvieron detenido por



algunos días y continuó siendo torturado, tanto física como psicológicamente, e interrogado por el paradero del diputado Matías Núñez. En una de las oportunidades, lo obligaron a estar de pie por muchas horas. Debido a su debilidad, sufrió un desmayo, siendo despertado con un balde de agua fría. Mientras se paraba, un cabo le pegó un culatazo que le fracturó el brazo derecho, fractura que nunca se pudo tratar adecuadamente.

Una vez que queda en libertad, lo que acontece el día 14 de octubre de 1973, volvió con mucho temor a su trabajo, le prohibieron estrictamente hablar con sus compañeros, recibiendo constantes amenazas de sus superiores en un clima insoportable. Transcurrida una semana de su vuelta al trabajo, lo llamaron a la oficina de Personal y delante de personal de carabineros lo obligaron a renunciar a su trabajo.

Desde ese momento, comenzó a vivir en la clandestinidad, cambiándose de casa constantemente, hasta que se exilia en Argentina, Uruguay y Brasil.

Asevera que producto de las torturas anteriores quedó con secuelas físicas que se traducen en un 55% de discapacidad, según dictamen Nro. 351/2004 de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Occidente, de fecha 12 de Mayo de 2004, por la fractura del brazo derecho sufrida y nunca tratada (diagnóstico de Artrosis Severa Codo Derecho Húmero Cubital, Paresia Crónica Cubital Derecho y Fractura Antigua Húmero Distal Derecho), además de sufrir de crisis de pánico en tratamiento en el Cosam de su comuna a la fecha

- 2) Respecto de don Eliseo Heriberto Concha Muñoz, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura N° 6058, nacido el 20 de febrero de 1949, de actuales 70 años de edad. A la fecha de ocurrencia de los hechos era militante del Partido Socialista y Presidente del sindicato de obreros de la dirección general de Aguas perteneciente al Ministerio de Obras Públicas de Melipilla. Fue detenido en su trabajo ubicado en ese entonces en la Dirección General de Aguas el día 21 de septiembre de 1973 por personal de Carabineros de Melipilla. Su detención fue practicada por un piquete de carabineros entre los que se pueden mencionar el Cabo EMILIO MARÍN, carabinero AMADOR FUENTES, el médico BERNARDO PURTO y el teniente PEDRO RAMÍREZ HIRANE, también conocido con el apelativo de “PEDRO PACO”, y trasladado a la Comisaría de Carabineros de Melipilla, lugar donde fue incomunicado y torturado, colocándolo en un catre de fierro y le aplicaron corriente en distintas partes del cuerpo, tales como boca, genitales, dedos de las manos y pies y lengua. Durante las noches le propinaban golpizas entre varios uniformados, con puños, pies y “tontos de goma”, pateaduras hasta dejarlo moribundo, perdiendo el conocimiento en varias ocasiones. Una noche fue sacado de la comisaría con los ojos vendados. Presume que fue subido a una camioneta, porque lo trasladaron en un vehículo boca abajo. Al llegar, lo hicieron bajar y en un descuido de carabineros se levantó la venda de los ojos. Vio que estaba en el Puente Chocalán, ubicado al sur de Melipilla. En este lugar fue golpeado y pateado, le pegaron culatazos y fue sometido a simulacros de fusilamiento, apuntándolo directamente a la cabeza. Se ensañaron con él, pues sabían que era amigo del diputado Matías Núñez Malhue, a quien buscaban y le pedían información sobre su paradero. También lo acusaban de tener armas escondidas y de intento de asalto a la comisaría. Permanece en la comisaría hasta el día 24 de septiembre de 1973. Luego fue trasladado a la cárcel de Melipilla, lugar



donde permanece detenido hasta el 16 de octubre de 1973. Sindica como sus torturadores al DOCTOR BERNARDO PURTO, al capitán de ejército en retiro EDUARDO MORALES OSORIO, quien luego fue Alcalde de Melipilla, al teniente PEDRO RAMÍREZ HIRANE, al cabo EMILIO MARIN y al carabinero AMADOR FUENTES.-

Refiere que a consecuencia de las torturas sufridas, padece de trastorno de estrés post-traumático e insomnio no orgánico.

- 3) En cuanto a don Jaime Agustín Salinas Véliz, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura N° 22.321, nacido el 22 de Noviembre de 1928, de actuales 90 años de edad. A la fecha de ocurrencia de los hechos era militante del Partido Socialista y Director y profesor del Instituto Comercial de Tomé. Fue detenido en su domicilio ubicado en ese entonces en calle El Carmen Nro. 503, Melipilla, por personal de Carabineros de Melipilla, entre los que se encontraba el sargento de carabineros ROLANDO GUTIÉRREZ, el día 17 de septiembre de 1973. Trasladado a la Comisaría de Melipilla, lugar donde fue incomunicado y torturado con un simulacro de fusilamiento. Se le acusó de ser instructor de guerrillas en Pomaire, acusación completamente absurda, puesto que a la fecha don Jaime era profesor en Tomé y vivía en Concepción. El día 17 de septiembre de 1973 lo trasladan a la Cárcel de Melipilla, lugar donde nuevamente fue víctima de un simulacro de fusilamiento y golpes de pies y puños por parte de personal uniformado. Entre esta fecha y la de su libertad, es trasladado al Centro de Torturas denominado Tejas Verdes, donde fue interrogado por un espacio de tiempo aproximado de dos horas. Queda en libertad el día 06 de octubre de 1973.

Asevera que producto de las torturas sufridas, sufrió de depresión, puesto que su detención provocó, además, la pérdida de su cónyuge e hijas, quienes se fueron a vivir a otro domicilio. Además, perdió la propiedad en el cargo y, si bien en el futuro pudo seguir desempeñándose como docente, siempre lo fue en calidad de suplente, no teniendo estabilidad laboral.

- 4) En relación a don Eugenio Arnoldo Soto Suárez, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura N° 23.759, nacido el 02 de Enero de 1951, de actuales 68 años de edad. A la fecha de ocurrencia de los hechos era militante del Partido Socialista. Fue detenido en su domicilio el día 12 de octubre de 1973 por personal de Carabineros, los cuales irrumpieron violentamente, dándoles golpes de pies y puños, así como también con el armamento que portaban. Trasladado a la comisaría de Melipilla, lugar donde fue torturado con golpes de pies y puños en distintas partes de su cuerpo y culatazos. El día 15 de octubre de 1973 es trasladado e ingresado a la Cárcel de Melipilla, lugar donde permanece detenido hasta el día 22 de noviembre de 1973.

Producto de la experiencia vivida queda con graves secuelas psicológicas, baja autoestima, trastorno de estrés post – traumático e insomnio.

- 5) Tratándose de don Benjamín Cortés Valdenegro con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura N° 6594, nacido con fecha 18 de Marzo de 1949, de actuales 70 años de edad. A la fecha de ocurrencia de los hechos era militante del Partido Comunista y empleado particular de Endesa, Central Rapel. Fue detenido en su lugar de trabajo el día 17 de septiembre de 1973 por personal de



Carabineros, quienes lo trasladan e ingresan a la Tenencia Central Rapel. En dicho lugar, donde permanece incomunicado hasta el día 19 de septiembre de 1973, fue torturado con golpes de pies y puños y le hicieron varios simulacros de fusilamiento. El día 19 de septiembre de 1973 es trasladado a la Comisaría de Melipilla, siempre incomunicado, y el mismo día trasladado e ingresado a la Cárcel de Melipilla, donde permanece recluido hasta el día 04 de diciembre de 1973, fecha en que queda en libertad. Luego de su detención, durante dos meses su vivienda fue allanada todas las semanas por personal de Carabineros, motivo por el cual se traslada a Santiago en el año 1974, para finalmente, salir del país con destino a Argentina el año 1975. Vuelve a radicarse en Chile definitivamente el año 1978.

Producto de la experiencia vivida queda con graves secuelas sicológicas, angustia permanente y temor a ser aprehendido nuevamente.

- 6) Respecto de don Juan Guillermo Cornejo Sánchez, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura N° 6410, nacido con fecha 25 de Junio de 1950, de actuales 69 años de edad. A la fecha de ocurrencia de los hechos era dirigente de la Juventud Socialista. Fue detenido, tras presentarse voluntariamente por el llamado de un bando militar, por Carabineros de la Comisaría de Melipilla, el día 12 de septiembre de 1973. En dicho lugar es incomunicado y torturado con la aplicación de corriente eléctrica en diversas partes de su cuerpo, principalmente los genitales, además de ser golpeado por uniformados con golpes de pies y puños con el armamento que portaban. En esas condiciones de permanente tortura, permanece por el día 12 de Septiembre de 1973 y el mismo día es trasladado al centro de reclusión y torturas de Tejas Verdes, dirigido por MANUEL CONTRERAS SEPÚLVEDA, donde continúan las torturas, del mismo tenor, además de simulacros de fusilamiento, permaneciendo en dicho lugar hasta el 18 de Octubre de 1973, fecha en la que es trasladado e ingresado a la Cárcel de Melipilla. En dicho lugar nuevamente continúa siendo torturado y lo mantienen incomunicado hasta el día 03 de Noviembre de 1973, fecha en la que queda en libertad por falta de méritos.

Producto de la experiencia vivida queda con graves secuelas sicológicas, angustia permanente y temor a ser aprehendido nuevamente.

- 7) En lo concerniente a don Rafael Arcángel Trujillo Osorio, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura N° 24.627, nacido con fecha 25 de Enero de 1955, de actuales 64 años de edad. A la fecha de ocurrencia de los hechos era menor de edad, dirigente regional de las Juventudes Comunistas y Presidente del comité político de CORA, lugar donde trabajaba. Fue detenido en la localidad de San José, comuna de Melipilla, el día 21 de Octubre de 1973 por personal de Carabineros, dos de los cuales eran el sargento SILVIO CONCHA y otro el carabinero MARÍN, a quienes sindicó, además, como sus torturadores, los que lo trasladan a la Comisaría de Melipilla, lugar donde fue interrogado y torturado con golpes de puños y pies en distintas partes del cuerpo, lumazos y culatazos de fusil, además de la aplicación de corriente eléctrica en distintas partes de su cuerpo, especialmente los genitales. Lo anterior duró siete días, hasta que queda en libertad con fecha 27 de septiembre de 1973. Es detenido en una segunda oportunidad el día 18 de enero de 1985 en la sede del sindicato de trabajadores de la construcción de Melipilla, por personal de Carabineros. Traslado a la



Comisaría de Melipilla, lugar donde es torturado por carabineros con golpes mientras era interrogado, lumazos y cachetadas. Queda en libertad el mismo día. Luego, es detenido en una tercera oportunidad en la localidad de Codigua por personal de Carabineros. Traslado al retén de Codigua, lugar donde es torturado por carabineros con golpes de puños, lumazos y amenazas de ser relegado. Queda en libertad el mismo día. Finalmente, fue detenido en una cuarta oportunidad en su domicilio por civiles y personal de la Central Nacional de Informaciones (CNI), el día 08 de septiembre de 1986. Traslado a un recinto secreto en Melipilla por orden del fiscal LUIS GONZÁLEZ, de la Primera Fiscalía de Santiago, quien había autorizado el allanamiento de su hogar para ver si don Rafael tenía armas y explosivos. Lo anterior, producto de una denuncia de sus vecinos, quienes lo habían denunciado por su carácter de dirigente. En dicho lugar fue torturado con golpes de corriente en distintas partes de su cuerpo, principalmente los genitales, además de golpes de pies y puños. Queda en libertad el mismo día.

Producto de las torturas, queda con secuelas físicas consistentes en inflamación permanente de los testículos, angustia, depresión y temor permanente a ser nuevamente detenido.

- 8) Finalmente, tratándose de don Alfonso Segundo Hinojosa Serrano, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura N° 11.558, nacido el 20 de noviembre de 1937, de actuales 81 años de edad. A la fecha de ocurrencia de los hechos era dirigente del Partido Socialista, candidato a regidor y funcionario del Hospital de Melipilla. Fue detenido en su lugar de trabajo el día 16 de septiembre de 1973 por un piquete de Carabineros quienes allanaron violentamente el servicio de lavandería del Hospital San José de Melipilla, lugar donde don Alfonso trabajaba, siendo golpeado y agredido por dichos uniformados con golpes de pies y culatazos de fusil y violentamente tirado a una camioneta. Fue llevado a la Comisaría de Melipilla, lugar donde apenas llegado procedieron a torturarlo con golpes de pies y puños, con palos, culatazos y “tontos de goma”. Le preguntaban por la ubicación de armas, explosivos y municiones y por el lugar donde se encontraba el diputado Matías Núñez. Sindica como sus torturadores al sargento SILVIO CONCHA, al cabo EMILIO MARÍN, al carabinero AMADOR FUENTES y al teniente PEDRO RAMÍREZ HIRANE, también conocido con el apelativo de “PEDRO PACO”. El día 17 de septiembre de 1973 fue trasladado junto a otros detenidos a un campo de concentración cercano al Centro de Torturas denominado Tejas Verdes, bajo el puente Gallardo. Fueron amarrados de a dos y trasladados a la Cárcel de Barranca, donde quedan a disposición de la Fiscalía de Tejas Verdes. En dicho lugar es desnudado y golpeado por personal militar en forma muy violenta y recibió descargas eléctricas en distintas partes de su cuerpo y quemaduras de cigarrillos. Al ser interrogado le preguntaban por la ubicación de armas, explosivos y metralletas. El día 28 de septiembre de 1973 fue trasladado e ingresado a la Cárcel de Melipilla, lugar donde permanece hasta el día 11 de Diciembre de 1973, quedando en libertad por falta de méritos.

Producto de las torturas sufridas, queda con graves secuelas psicológicas, además de padecer de pérdidas de memoria y padecer de alcoholismo, tratado con éxito.



Posteriormente, indica que de los tormentos descritos en cada caso, resulta inequívoco un perjuicio tanto psíquico, como físico inconmensurable provocado por el Estado de Chile durante el período del gobierno dictatorial; daños que tienen el carácter de permanente. En este acápite cita jurisprudencia pertinente en la materia.

Por todo lo anterior solicita el pago de \$200.000.000 para cada uno de los demandantes.

En cuanto al derecho, menciona que el Estado de Chile es civilmente responsable ya que a quienes se acusa su autoría, a la fecha de su comisión eran miembros del Ejército de Chile y de otras ramas de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Públicas o civiles adscritos a las mismas, quienes se encontraban revestidos de autoridad pública.

Alude que el Estado de Chile ha reconocido expresamente su responsabilidad en la práctica de secuestro y tortura ocurrida durante la dictadura militar, mediante distintos actos e instrumentos jurídicos, entre ellos cabe destacar el Informe emitido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y el Informe sobre Prisión Política y Tortura, denominado “Informe Valech”. En efecto, en el mencionado Informe Valech, mis representadas fueron reconocidas como víctimas de prisión política y tortura.

Recalca que a la acción deducida no le resultan aplicables las normas de prescripción que contempla el Código Civil.

Concluye en mérito de lo expuesto y normas jurídicas citadas, tener por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, ya individualizada, acogerla a tramitación y, en definitiva, se declare que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas de que fueron objeto, la suma de \$ 200.000.000.- a don Joaquín Castellanos Guerra, don Eliseo Heriberto Concha Muñoz, don Jaime Agustín Salinas Veliz, don Eugenio Arnoldo Soto Suárez, don Benjamín Cortés Valdenegro, don Juan Guillermo Cornejo Sánchez, don Rafael Arcángel Trujillo Osorio y don Alfonso Segundo Hinojosa Serrano, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos; todo con costas.

Con fecha 05 de noviembre de 2019, doña Ruth Israel López, Abogada Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, contesta la demanda solicitando desde ya su total rechazo conforme a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que expone.

Opone excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizados los demandantes. Expresa que el Estado de Chile, en un esfuerzo por reparar el daño sufrido por víctimas de violaciones a los derechos humanos, ha efectuado una serie de esfuerzos tendientes a conceder la reparación del daño. Así la ley 19.123 y las demás normas conexas (como la ley 19.992, referida a las víctimas de torturas) han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En ese orden de ideas, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b)



Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
c) Reparaciones simbólicas.

En cuanto a las reparaciones mediante transferencias directas de dinero, menciona que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2015, en concepto de: A) Pensiones: la suma de \$199.772.927.770.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig); B) Pensiones: \$419.831.652.606.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); C) Bonos: la suma de \$ 41.856.379.416.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$22.205.934.047.- por la ya referida Ley 19.992; y D) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123; E) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$ 21.256.000.000. En consecuencia, a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.

Afirma que desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Respecto de las reparaciones específicas indica que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la ley 19.992 y sus modificaciones. Explica que dicha ley -y sus modificaciones- estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, cabe consignar que los demandantes recibieron en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

En lo concerniente a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase. En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Finalmente, respecto de las reparaciones simbólicas, invoca una compensación satisfactiva mediante la construcción de memoriales, establecimiento de museos y obras afines.



Indica que de todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH. Así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

En este punto el fallo *Domic Bezic, Maja y otros con Fisco* ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues *“aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal”*.

Lo anterior ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema que, en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos, resolviendo que:

“DECIMO NOVENO: Que en cuanto a la actora Flor Rivera Orellana, ella ha percibido los beneficios de la Ley N° 19.123, de forma que no puede pretender una indemnización a un daño del que ya ha sido reparada. En efecto, la Ley N° 19.123 es la que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, estableció pensiones de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas que señala y según su Mensaje el objetivo último de ella era reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Además, de acuerdo al artículo 2 de su texto se dispone que: “Le corresponderá especialmente a la Corporación: 1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de ésta para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”. De lo expresado puede inferirse que los beneficios otorgados a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado por esas personas, objetivo resarcitorio coincidente con la pretensión formulada a través de la presente vía jurisdiccional y en consecuencia es evidente que aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria de daño moral que la aquí reclamada y son financiados con recursos fiscales según se desprende del Título VI de dicha ley, circunstancias todas que impiden acoger la pretensión de la actora por contraponerse con la idea básica que una misma causa no puede dar origen a una doble indemnización. Refuerza lo sostenido el hecho que el artículo 24 de la ley solamente hizo compatible la pensión de reparación con cualquiera otra pensión de que gozara o pudiese gozar el respectivo beneficiario, de manera que no cabe extender el alcance de esta norma a otras situaciones no previstas en sus términos. En estas condiciones no es dable estimar que el goce de la pensión de reparación de la Ley N° 19.123 pueda ser compatible con otras indemnizaciones al mismo daño moral que la ley trató de resarcir con su otorgamiento, más aún cuando dicha pensión es renunciable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, situación que no corresponde a la de la demandante, quien –como se dijo– percibe las pensiones a que se ha hecho referencia. De esta forma es innecesario pronunciarse sobre la eventual renuncia a la prescripción por parte del Fisco de Chile,



como quiera que la acción deducida por la señora Rivera es incompatible con los beneficios aludidos”.

Posteriormente, además de la reparación alegada, opone a la demanda la excepción de prescripción extintiva, esgrimiendo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes. Conforme al relato efectuado por los actores, la detención ilegal, prisión política y tortura que sufrieron, ocurrieron en las siguientes fechas: a) Don Joaquín Castellanos Guerra: Detenido en comisaría de Melipilla del 16 de septiembre de 1973 al 14 de octubre del mismo año; b) Don Eliseo Heriberto Concha Muñoz: Detenido en comisaría de Melipilla desde el 21 al 24 de septiembre de 1973 y del 24 de septiembre al 16 de octubre de 1973 en la cárcel de Melipilla; c) Don Jaime Agustín Salinas Veliz: Detenido en comisaría de Melipilla y cárcel melipilla, desde el 17 de septiembre al 06 de octubre de 1973; d) Don EUGENIO ARNOLDO SOTO SUAREZ: Detenido en comisaría de Melipilla desde el 12 al 15 de octubre de 1973 y en cárcel de Melipilla del 15 de octubre al 22 de noviembre de 1973; e) Don Benjamín Cortés Valdenegro: Detenido en tenencia Central Rapel, desde el 17 al 19 de septiembre de 1973, en comisaria de Melipilla el 19 de septiembre de 1973, en cárcel de Melipilla del 19 de septiembre de 1973 al 04 de diciembre de al 04 de diciembre de 1973.; f) Don Juan Guillermo Cornejo Sánchez: Detenido en comisaría de melipilla el 12 de septiembre de 1973; en Tejas Verdes del 12 al 18 de octubre de 1973 y en cárcel de Melipilla del 18 de octubre de 1973 al 03 de noviembre de 1973; g) Don Rafael Arcángel Trujillo Osorio: Detenido en comisaria de Melipilla desde el 21 al 27 septiembre de 1973; en retén de Codigua, en fecha indeterminada por 1 día, y en recinto CNI de Melipilla el 08 de septiembre de 1986 (un día) y; h) Don Alfonso Segundo Hinojosa Serrano: Detenido en comisaría de Melipilla el 16 de septiembre de 1973; en Tejas Verdes del 17 al 28 de septiembre de 1973 al 28-09-1973; y cárcel de Melipilla, desde el 28 de septiembre de 1973 al 11 de diciembre de 1973.

Es del caso que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 16 de octubre de 2019, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, opongo la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que el Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opongo la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de las acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil. Asimismo, indica que no existe normativa alguna que establezca que en materia de Derechos Humanos, la acción derivada de un ilícito civil sea de carácter imprescriptible, citando al efecto jurisprudencia afín.

En subsidio de las defensas y excepciones precedente, opone alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y los montos pretendidos, toda vez que la



indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva. Ha dicho la Excma. Corte Suprema: *“Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”*.

En subsidio de lo anterior, alega que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Finalmente alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses, los que sólo pueden devengarse en el caso que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Concluye, solicitando tener por contestada la demanda civil, y en definitiva, acoger las excepciones y defensas opuestas, y rechazar la demanda en todas sus partes con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Con fecha 09 de noviembre de 2019 obra réplica del actor, sin incorporar hechos sustantivos nuevos a la causa, refutando las excepciones, alegaciones y defensas planteadas por el demandado.

Con fecha 19 de noviembre de 2019 consta dúplica del demandado, donde procede a reiterar las alegaciones, defensas y excepciones expuestas en la contestación del libelo.

Con fecha 21 de noviembre de 2019 se recibió la causa a prueba, rindiéndose la instrumental que obra en autos.

El 26 de diciembre de 2021 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

1º) Que, don Boris Paredes Bustos, abogado, domiciliado en Doctor Sotero del Río N°326, oficina 707, comuna de Santiago, compareciendo en representación de don Rafael Arturo Castro Amaro, pensionado, domiciliado en 5 ½ Oriente A N°2478, Talca, , deduce demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas 1687, comuna de Santiago. , conforme fundamentos de hechos y de derecho reseñados en la expositiva de esta sentencia, solicitando en definitiva se declare que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas de que fue objeto, la suma de \$ 200.000.000.- a don Rafael Arturo Castro Amaro más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos; todo con costas.



2º) Que, doña Ruth Israel López, abogado procurado fiscal del Consejo de Defensa del Estado, contesta la demanda solicitando su total rechazo conforme excepciones y alegaciones ya expuestas.

3º) Que, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o esta, ello al tenor de lo preceptuado en el artículo 1698 del Código Civil.

4º) Que, a fin de acreditar sus dichos la parte demandante rindió prueba instrumental que se singulariza a continuación: copia certificado de salud de don Joaquín Castellanos Guerra evacuado por el PRAIS de Melipilla, siéndole realizada la evaluación en el mes de Noviembre del año 2020; de don Eliseo Concha Muñoz evacuado por el PRAIS de Melipilla, siéndole realizada la evaluación en el mes de Noviembre del año 2020; de don Jaime Salinas Véliz evacuado por el PRAIS de Melipilla; de don Eugenio Soto Suárez evacuado por el PRAIS de Melipilla, siéndole realizada la evaluación en el mes de Diciembre del año 2020; de don Benjamín Cortés Valdenegro evacuado por el PRAIS de Melipilla, siéndole realizada la evaluación en el mes de Enero del año 2021; de don Juan Cornejo Sánchez evacuado por el PRAIS de Melipilla; de don Rafael Trujillo Osorio evacuado por el PRAIS de Melipilla, siéndole realizada la evaluación en el mes de Octubre del año 2020 y de don Alfonso Hinojosa Serrano evacuado por el PRAIS de Melipilla, siéndole realizada la evaluación en el mes de Octubre del año 2020; copia de Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech 1; copia de antecedentes de carpeta de don Joaquín Castellanos Guerra, de don Eliseo Concha Muñoz, de don Jaime Salinas Veliz, de don Eugenio Soto Suárez, de don Benjamín Cortés Valdenegro, de don Juan Cornejo Sánchez, de don Rafael Trujillo Osorio y de don Alfonso Hinojosa Serrano del Instituto Nacional de Derechos Humanos, presentados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; copia de Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 1, donde figuran los demandantes de autos; copia de certificado Psicológico y Social de los demandantes evacuado por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, de fecha 20 de Mayo de 2020; copia de artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad e incorporados en los autos rol C-22.561-2018, del 28º Juzgado Civil de Santiago, seguidos por la misma materia: copia de artículo titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad; copia de artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de julio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad; copia de artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de Abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad; copia de artículo titulado “Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos” del mes de junio del año 1989, suscrito por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Aux. Enf. Janet Ulloa, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad; copia de certificado de nacimiento de don Rafael Arcángel Trujillo Osorio emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

5º) Que, la parte demandada no rindió probanza alguna que ponderar. Sin embargo obra a folio 18 copia de respuesta oficio que éste solicitara, esto es, ORD N°62143 / 2019 de fecha 21 de noviembre de 2019 emitido por el Instituto de Previsión Social que da



cuenta de los montos por reparación de la leyes N° 19.992 y 20.874 recibidos por los demandantes de autos.

6°) Que, los demandantes han comparecido a estrados invocando su calidad de víctimas de violación a los derechos humanos relatando una serie de hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, ya descritos en la parte expositiva de este fallo, motivo por el cual reclaman por esta vía el resarcimiento del daño que dichos episodios les ocasionó.

7°) Que, con el mérito de la contestación de la demanda y la copia de Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas emitida por la Comisión Valech, no objetada, se tiene por acreditado que don Joaquín Castellanos Guerra, don Eliseo Heriberto Concha Muñoz, don Jaime Agustín Salinas Veliz, don Eugenio Arnoldo Soto Suárez, don Benjamín Cortés Valdenegro, don Juan Guillermo Cornejo Sánchez, don Rafael Arcángel Trujillo Osorio y don Alfonso Segundo Hinojosa Serrano tienen la calidad de víctimas de violaciones a los derechos humanos, figurando bajo los números 200 (nómina Valech 1 Reconsideración), 6058, 22321, 23759, 6594, 6410, 24627 y 11558, respectivamente

8°) Que, el Fisco de Chile opone excepción de prescripción extintiva de la acción civil indemnizatoria, fundado en que a pesar de encontrarse suspendida la prescripción durante el período de dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 16 de octubre de 2019, ha transcurrido con creces el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil, o en subsidio aquel contemplado en el artículo 2515 del mismo cuerpo legal

9°) Que, a fin de resolver la excepción de prescripción, cabe tener en consideración que la detención ilegal de demandante por agentes del Estado constituye un crimen de lesa humanidad y una vulneración a los derechos humanos. En efecto el hecho en cuestión vulnera lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, norma que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, así si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial obedece a una índole humanitaria proveniente de los derechos de todo ser humano reconocidos éstos en el Tratado Internacional indicado, que prima sobre las normas de derecho interno, en especial del artículo 2497 del Código Civil.

10°) Que, resulta improcedente dar cabida a la aplicación de normas comunes contenidas en los cuerpos normativos internos como el Código Civil para resolver la contienda en cuestión; en tal sentido el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos obliga a los estados parte a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades y el artículo 5 de la Constitución Política de la República que reconoce como limitación a la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emana de la naturaleza humana y la obligación del mismo de promover dichos derechos fundamentales.

11°) Que, dado que los derechos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado.



12°) Que, sustenta lo anterior el artículo 131 del Convenio de Ginebra que sostiene que ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluye la tortura o tratos inhumanos.

13°) Que por lo demás, el que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad establezca en su artículo 4° la imprescriptibilidad de la acción penal a los crímenes mencionados en el artículo 1 entre otros, esto es los de lesa humanidad no conlleva necesariamente la exclusión de la imprescriptibilidad de la acción civil, máxime considerando el contexto del preámbulo de la convención en análisis, en especial aquellos de los párrafos 3, 4, 6 y 7.

14°) Que a la luz de lo que se ha venido diciendo no cabe sino el rechazo la excepción de prescripción

15°) Que, finalmente el demandado deduce excepción reparación integral fundado en que los demandantes ya han sido indemnizado, ello en virtud de la dictación de la Ley N°19.123 que dispuso la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la que se ha realizado a través de transferencias directas de dinero, asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas y reparaciones simbólicas.

16°) Que con dicha alegación el Fisco reconoce, en el caso concreto, una necesidad de reparación y como consecuencia de ello un daño, el que esta sentenciadora entiende que corresponde al daño moral, esto es, toda afección que acarrea un agravio en la afecciones legítimas o de un derecho subjetivo inherente e inmaterial de una persona e imputable a la otra.

En el caso de autos, el perjuicio antes señalado se entiende corresponder al daño moral de los actores el que hicieron consistir, en síntesis, en el sufrimiento y angustia irrogada por las diversas vejaciones, torturas físicas y psicológicas cometidas en su persona por agentes del Estado.

17 °) Que, en concordancia al daño, es menester tener presente lo consignado en la documental consistente en la Nómina de Víctimas emitida por la Comisión Valech, oportunidad en la que se dispuso que *“La Comisión ha reconocido la condición de víctima de prisión por razones políticas y de tortura a través de un proceso colegiado de evaluación de los antecedentes de cada caso en particular, dirigido a la identificación de elementos de juicio objetivos, que permitieran formarse convicción moral sobre dicha condición”*; así las cosas, forzoso resulta concluir que en virtud de principios internacionales en materia de maras los derechos que le fueran conculcados en el contexto de autos constituyen por sí solos un daño moral que debe ser compensado por el Fisco de Chile.

18°) Que efectivamente, tal y como lo señala el demandado al contestar la demanda, se han efectuado por el Estado chileno distintos y variados esfuerzos una vez terminado el régimen militar, de resarcimiento de perjuicios mediante pensiones asistenciales y simbólicas a todos aquellos que se encuentran en una situación como la de los demandantes, las que han tenido un carácter general buscando una solución uniforme, abstracta, sin considerar la situación específica y particular de los familiares cuyo dolor fue causado por agentes del Estado en dicho período, ello no configura lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al pago de una justa indemnización a los lesionados, esto es, a cada persona en específico, esta



sentenciadora no considera acorde a la norma internacional mencionada que obliga al Estado chileno en virtud del artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República, por lo que se desestimaré la alegación de suficiencia de pago.

19°) Que sin perjuicio que esta Magistrado observa una debilidad probatoria tendiente a acreditar el daño moral específico para cada uno de los demandantes, es del caso que encontrándose acreditada la calidad de víctima de éstos, en concordancia a lo expuesto en los informes emitidos tanto por el Programa de Reparación Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), y la carpeta de antecedentes presentados ante el Instituto de Derechos Humanos, todos exentos de objeción, es posible entender que naturalmente han sufrido una aflicción producto de los tratos inhumanos a que fuera expuesto por agentes del Estado, el que debe conforme a criterios de justicia y equidad ser indemnizado, mas no conociéndose detalladamente el grado de aflicción sufrido es que se estima prudencialmente la indemnización del daño moral en la suma de \$45.000.000 en favor de cada uno de los demandantes.

20°) Que, en cuanto a la solicitud de reajustes e intereses, atendida la naturaleza declarativa de la presente sentencia, las sumas ordenadas deberán enterarse debidamente reajustadas de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, más intereses corrientes para operaciones de crédito reajustables en moneda nacional, contabilizados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y hasta que se efectúe el pago efectivo.

21°) Que los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran lo resuelto precedentemente.

Y atendido lo antes razonado y lo dispuesto en los artículos 160, 170, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículo 48 del Código Orgánico de Tribunales; artículos 2332 y 2497 del Código Civil; Ley N° 19.992, ley N° 19.123; artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14.1 de la Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; artículos 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; los Principios 15, 18 y 20 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, se declara:

I.- Que se rechazan las excepciones de prescripción y reparación integral;

II.- Que se acoge la demanda de autos respecto del daño moral sufrido, daño que esta sentenciadora estima prudencialmente en la suma \$45.000.000 para cada uno de los demandantes, esto es, don Joaquín Castellanos Guerra, don Eliseo Heriberto Concha Muñoz, don Jaime Agustín Salinas Veliz, don Eugenio Arnoldo Soto Suárez, don Benjamín Cortés Valdenegro, don Juan Guillermo Cornejo Sánchez, don Rafael Arcángel Trujillo Osorio y don Alfonso Segundo Hinojosa Serrano.

III. Que las sumas referidas deberán ser pagadas incrementadas con reajustes de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, y con intereses corrientes para operaciones de crédito reajustables en moneda nacional, contabilizados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y hasta la fecha de su pago efectivo.

IV. Que no se condena en costas a la parte demandada por no resultar totalmente vencida.



Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Dictada por doña Valentina Gabriela Villarroel Varela, Juez Suplente; autoriza don Erwin Cárdenas Jofré, Secretario Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, diecisiete de Enero de dos mil veintidós.**

